




CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO PROCESO RAD,2024-00600-00

Desde Angela Maria Celis Llanos <amcelis@Procuraduria.gov.co>

Fecha Mar 28/01/2025 16:53

Para Juzgado 03 Laboral Circuito - Valle del Cauca - Cali <j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivo adjunto (484 KB)

CONCEPTO JUZGADO3 DTE JOSE ALEJANDRO ALCALDE CEBALLOS VS DTO DE CALI RAD. 2024-00600.pdf;

Señora

JUEZ TERCERA (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI

Asunto: INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO

Proceso: Ordinario Laboral de Primera Instancia

Demandante: JOSE ALEJANDRO ALCALDE CEBALLOS

Demandado: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI

Radicado: 76001-31-05-003-2024-00600-00

Cordial saludo.

Envío de manera atenta, escrito de intervención judicial en el asunto de la referencia.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,



Angela Maria Celis Llanos

Procurador Judicial II

Procuraduría 28 Judicial II Asuntos Del Trabajo Y Seguridad Social Cali

amcelis@Procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP:#N/A

Línea Gratuita Nacional : 01 8000 940 808

Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321



Santiago de Cali, 22 de octubre de 2024

Señora
JUEZ TERCERA (3) LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

Asunto: INTERVENCIÓN MINISTERIO PÚBLICO
Proceso: Ordinario Laboral de Primera Instancia
Demandante: JOSE ALEJANDRO ALCALDE CEBALLOS
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI
Radicado: 76001-31-05-003-2024-00600-00

ANGELA MARIA CELIS LLANOS, en calidad de Procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali, acudo a su Despacho en intervención judicial, dentro del proceso de la referencia, no como parte en causa, sino como agente del Ministerio Público, sujeto procesal especial interviniente en defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y garantías fundamentales, en los siguientes términos:

1. Fundamentos constitucionales, legales y jurisprudenciales en relación con la intervención del Ministerio Público en los procesos laborales.

De conformidad con el Núm. 7º del Art. 277 de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Procurador General de la Nación por sí o por medio de sus Delegados “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos o garantías fundamentales”, por su parte el Art. 16 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social señala que “El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos laborales de conformidad con lo señalado en la ley”.

En relación con los Procuradores Judiciales, quienes además de tener la condición de agentes del Ministerio Público, el Art. 48 del Decreto-Ley 262 de 2000, dispone que actuarán ante las salas laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los juzgados laborales, los tribunales de arbitramento a que se refiere el Código Sustantivo del Trabajo y demás autoridades que señale la ley, cuando sea necesario para defender el orden jurídico, las garantías y derechos fundamentales, individuales o colectivos de los trabajadores y pensionados o de las minorías étnicas, Igualmente, intervendrán en los procesos laborales en que sean parte incapaces, cuando éstos no tengan quien los represente.

La intervención de la Procuraduría en su condición de Ministerio Público en la Jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, es reiterada en el Código Procesal del Trabajo al ordenar correr traslado de la demanda (Art. 74) y demanda de reconvencción (Art. 76).

En lo que tiene que ver con el Código General del Proceso, el artículo 45 señala ante qué autoridades ejerce sus funciones el Ministerio Público, determinando que lo hace ante la Corte Suprema de Justicia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los jueces del circuito, municipales y de familia, las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y los tribunales de arbitraje, señalando en su parágrafo que las funciones



asignadas a los procuradores delegados podrán cumplirla los procuradores judiciales que actúen bajo su delegación y dirección.

Por su parte el artículo 46 de la normatividad antes citada, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, el Ministerio Público ejercerá las siguientes funciones:

“1. Intervenir en toda clase de procesos, en defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos.

2. Interponer acciones populares, de cumplimiento y de tutela, en defensa del ordenamiento jurídico, para la defensa de las garantías y derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales o colectivos, así como de acciones encaminadas a la recuperación y protección de bienes de la nación y demás entidades públicas.

3. Ejercer las funciones de defensor de incapaces en los casos que determine la ley.

4. Además de las anteriores funciones, el Ministerio Público ejercerá en la jurisdicción ordinaria, de manera obligatoria, las siguientes:

a) Intervenir en los procesos en que sea parte la nación o una entidad territorial.

b) Rendir concepto, que no será obligatorio, en los casos de allanamiento a la demanda, desistimiento o transacción por parte de la nación o una entidad territorial.

c) Rendir concepto en el trámite de los exhortos consulares.

PARÁGRAFO. El Ministerio Público intervendrá como sujeto procesal especial con amplias facultades, entre ellas la de interponer recursos, emitir conceptos, solicitar nulidades, pedir, aportar y controvertir pruebas.

Quando se trate del cumplimiento de una función específica del Ministerio Público, este podrá solicitar la práctica de medidas cautelares.”

De lo anterior se puede concluir que el Código General del Proceso, también da amplias facultades de Intervención judicial al Ministerio Público, a través de los Procuradores Delegados o de los Procuradores Judiciales que estén bajo su delegación y dirección, señalando las funciones que ejercerá o las que estén fijadas en leyes especiales.

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES:

La jurisprudencia también se ha encargado de fijar el sentido y alcance de la referida intervención judicial. Sobre el punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia con Rad. 32641, del 7 de octubre de 2008 M.P. Dr. CAMILO TARQUINO GALLEGU, se pronunció en los siguientes términos

“Para la Sala, es claro que el Ministerio Público por intermedio de sus procuradores judiciales en lo laboral, están plenamente facultados para “intervenir” en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción del trabajo, como expresamente lo indica el artículo 16 del C. P. L.; por lo que podrán, sin restricción de ninguna naturaleza, ejercer sus actividades para la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial, por así autorizarlo la Constitución Política, (art. 118) y para la defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, (Numeral 7 del art. 277 de la C.P., art. 56 del Decreto 2651 de 1991, art. 10 de la Ley 25 de 1894, art. 48 del Decreto



262 de 2000).

Obviamente, esta intervención del Ministerio Público en los procesos laborales, no puede enmarcarse dentro de los esquemas fijados a las partes, por cuanto la Constitución Política la garantiza (artículo 277 numeral 7), “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales”. Lo que quiere decir que, frente a alguno de estos bienes jurídicos, protegidos por el Constituyente, en el evento que el procurador o sus delegados considere necesaria su intervención, lo podrá hacer, ya sea formulando alegatos, interponiendo acciones o incidentes, proponiendo excepciones, solicitando pruebas y participando en su práctica, o rindiendo conceptos e informes que requiera su defensa, pues como lo indica el precitado artículo 277 (ibidem), en su inciso final, “Para el cumplimiento de sus funciones la Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial, y podrá interponer las acciones que considere necesarias.” Actuación que deberá entenderse y acomodarse a los parámetros y principios que gobiernan el proceso laboral.”

Desde el punto de vista del término para ejercer la facultad de intervención judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación en calidad de Ministerio Público, y proponerla excepción de prescripción en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y seguridad social, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas ocasiones se ha pronunciado al respecto, indicando que es procedente en cualquier etapa del proceso y en reciente sentencia del 4 de febrero de 2015, con Rad. 39064, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, se pronunció en los siguientes términos:

“Para esta Sala de la Corte, los argumentos expuestos por la autoridad demandada en la sentencia que se reprocha defienden razonablemente la finalidad de la intervención de este ente de control en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción del trabajo y de la seguridad social. En efecto, tras resaltar varios de los pronunciamientos de esta Corporación concerniente a las facultades procesales del Ministerio Público, de destacar que, verbigracia, al «Ministerio Público no se le puede aplicar el efecto preclusivo del término de traslado a partir de la notificación de la demanda, porque no ostenta la calidad de parte (...) lo cual implica que este pueda ejercer sus actividades sin restricción alguna», la Colegiatura coligió que era viable emprender el estudio de la mencionada excepción, lo que la llevó inevitablemente a declarar la prescripción.

Además, reforzó su posición al resaltar que «bien es cierto que el artículo 56 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, establece que la notificación al Ministerio público debe hacerse de manera personal, y este puede alegar dentro del término del cual disponen las partes para ello, ninguna norma sujeta su intervención al término preclusivo del traslado a las partes».

El reseñado criterio implica asumir que dicho ente no persigue un interés particular en sus intervenciones, pues este no hace parte de la relación jurídica sustancial, por el contrario su actuación va encaminada «a la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas», según el mandato superior del artículo 118, fundamento que cabe indicar, también fue acogido en la providencia objeto de análisis.

Bajo esas circunstancias, la decisión del Tribunal de observar la advertencia realizada por la Procuradora en punto a la prescripción, se muestra razonable



al entender que su fin no era otro que, se itera, proteger el interés público de la entidad descentralizada accionada.”

Por manera que, independientemente de que esta Sala comparta tal postura, lo cierto es que ello no constituye el quebrantamiento de garantías constitucionales, máxime que se soportó de manera razonable y con amparo en el ordenamiento jurídico, sin que por tanto pueda constituir argumento atendible la discrepancia de la actora.”

Respecto a la oportunidad para ejercer la facultad de intervención judicial por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional en la Sentencia T-392 del 20 de mayo de 2010, M.P. Dr. Jorge Iván Palacio, se refirió en los siguientes términos:

“Si bien la Procuraduría Judicial Laboral tuvo la oportunidad de intervenir en el trámite de primera instancia conforme lo establece el artículo 74 de la misma normativa adjetiva, esta circunstancia procesal no es suficiente para considerar que se trata de una posibilidad que se encontraba precluida, **teniendo en cuenta que la Carta Fundamental prescinde de cualquier límite temporal para que el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes intervengan** “en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas **cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.**” (Subrayado y resaltado fuera de texto original).

2. LO QUE SE DEMANDA

Solicita la parte demandante que se ordene mediante sentencia judicial la reliquidación de los diferentes elementos salariales y prestaciones sociales legales y convencionales pagados parcialmente, incluyendo como factor salarial las Primas de Navidad pagadas, correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Solicita además que se ordene el pago del valor de la indexación de las primas de navidad pagadas correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Además, pretende la reliquidación de las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, los recargos nocturnos, las horas extras diurnas en días dominicales y festivos, las horas extras nocturnas en días dominicales y festivos y los días compensatorios laborados pagados en los últimos tres (3) años en atención a la prescripción trienal de los derechos laborales.

Por último, pretende el reconocimiento de la indemnización de perjuicios en los términos de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia.

3. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER

En el presente proceso se debe establecer si el demandante en calidad de trabajador oficial tiene derecho o no al reconocimiento de la reliquidación de sus prestaciones sociales correspondientes a los años 2018 a 2021, con la inclusión de la prima de navidad como factor salarial y además, si le asiste o no derecho a la reliquidación de los horas de las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, los recargos nocturnos, las horas extras diurnas en días dominicales y festivos, las horas extras nocturnas en días dominicales y festivos y los días compensatorios laborados pagados, de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo 2008 – 2011, suscrita entre Distrito De Santiago de Cali y SINTRAMUNICIPIOS



4. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El demandante solicita la reliquidación de los diferentes elementos salariales y prestaciones Sociales legales y convencionales pagados (auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima legal semestral de junio, prima semestral de junio extralegal, vacaciones, prima legal de vacaciones, prima de vacaciones extralegal, y prima de antigüedad), incluyendo como factor salarial la prima de navidad pagada, correspondiente a los años 2018, 2019, 2020 y 2021.

Aduce que la prima de navidad constituye factor salarial para la liquidación de los diferentes emolumentos laborales (legales y convencionales) regulados a favor de los trabajadores oficiales del ente territorial demandado, esto con fundamento en diferentes fuentes formales de derecho, entre las que destaca el artículo 66 de la convención Colectiva de Trabajo 2008 - 2011, el cual señala:

"Artículo 66. FACTORES DE SALARIO: A partir de la firma de la presente Convención Colectiva de Trabajo, toda liquidación de los derechos laborales de los Trabajadores Oficiales se hará con base en el sueldo básico más el promedio que se obtenga con los siguientes factores de salario: Prima de vacaciones Legales y Extralegales, Prima de Productividad, Prima de alimentación, Horas extras, Prima de Calor, Prima Móvil, recargos nocturnos, Prima de Antigüedad, Primas Semestrales legales y extralegales de Junio y Diciembre, subsidio de transporte, y pago por trabajos en dominicales y festivos" (subrayado fuera del texto).

Sumado a lo anterior, solicita la indexación de la prima de navidad correspondiente a los años 2018 a 2021, con fundamento en que ésta fue pagada por el Distrito Especial de Santiago de Cali de forma extemporánea a sus trabajadores oficiales, pues no se canceló en el mes de diciembre de cada anualidad como lo dispone la norma.

Ahora bien, en cuanto al pago de las horas extras diurnas, extras nocturnas, los recargos nocturnos, las horas extras diurnas en días dominicales y festivos, las horas extras nocturnas en días dominicales y festivos y los días compensatorios laborados, aduce que le fueron pagados de manera equivocada con base en doscientas cuarenta (240) horas mensuales, y no sobre las cuarenta y cinco (45) horas semanales reguladas por el artículo 18 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, situación que arroja una base de ciento noventa (190) horas mensuales.

Al respecto cabe mencionar que los trabajadores oficiales, se rigen por lo establecido en el contrato de trabajo, por la convención colectiva de trabajo, el reglamento interno de trabajo y en lo no previsto en dichos instrumentos, se regirán por lo establecido en la Ley 6ª de 1945 y el título 30 del Decreto 1083 de 2015, en especial el Artículo 2.2.30.3.5 el cual indica:

"ARTÍCULO 2.2.30.3.5 Incorporación de cláusulas favorables al trabajador. En todo contrato de trabajo se consideran incorporadas, aunque no se expresen, las disposiciones legales pertinentes, las cláusulas de las convenciones colectivas o fallos arbitrales respectivos, y las normas del reglamento interno de la entidad, las cuales, por otra parte, sustituyen de derecho las estipulaciones del contrato individual, en cuanto fueren más favorables para el trabajador."

Ahora bien, si la convención colectiva guarda silencio o de manera expresa establece que la mencionada asignación no será tenida en cuenta como factor para liquidar prestaciones sociales, así deberá procederse, como consecuencia, las prestaciones sociales se deberán liquidar conforme a los factores que el ordenamiento jurídico de manera taxativa haya dispuesto para cada una de ellas.



Lo anterior teniendo en cuenta que las convenciones colectivas de trabajo son consideradas fuente formal de derecho y por lo tanto de norma jurídica, debiendo ser analizadas a la luz de las reglas, los principios y valores consagrados en la Constitución, tal como lo ha indicado la Honorable Corte Constitucional en diversa jurisprudencia, entre la que se encuentra la sentencia SU 228 de 2021.

Por último, me permito formular la siguiente:

5. EXCEPCIONES DE FONDO

PRESCRIPCIÓN.

De conformidad con las facultades constitucionales y legales, otorgadas al Ministerio Público antes señaladas, en aras de la defensa del orden jurídico y del patrimonio público, solicito respetuosamente a la Señora Juez que llegado el momento de proferir Sentencia, en el evento que acceda a las pretensiones de la demanda, proceda a determinar en favor de las entidades de derecho público demandadas, el acaecimiento del fenómeno de la prescripción de las prestaciones sociales no reclamadas dentro del término trienal establecido en el Art. 151 del CPTSS y 488 del CST, y demás pretensiones susceptibles de este fenómeno extintivo, teniendo en cuenta la fecha en que se hizo exigible el Derecho para la parte demandante, la fecha en que presentó la reclamación administrativa y la fecha de presentación de la demanda.

6. NOTIFICACIONES

A la suscrita, a través del correo electrónico institucional amcelis@procuraduria.gov.co.

De la Señora Juez, Atentamente,

ANGELA MARIA CELIS LLANOS
Procuradora 28 Judicial II para Asuntos Laborales de Cali